

Sur del Meta¹

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

MARZO DE 2019



Resumen

En términos generales, los diferentes actores tienen una percepción positiva sobre la implementación de algunos puntos del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que tiene que ver con los avances del PNIS y el PDET. La alta expectativa contrasta con la incertidumbre sobre la posición del gobierno y la preocupación por los recursos y capacidades para el cumplimiento de los compromisos. El deterioro de las condiciones de seguridad, por la presencia de actores armados ilegales, representa la mayor preocupación, dado el aumento de los índices de violencia en algunas zonas. La reincorporación de los excombatientes está en riesgo por el retraso en la puesta en marcha de proyectos productivos y la incertidumbre sobre la terminación de los ETCR y la renta básica. Además, los liderazgos sociales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

1. Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

El 25 de enero de 2019 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional –PATR— para la región de Meta-Guaviare que recoge cerca de 1.700 iniciativas de las comunidades de 12 municipios, ocho del Meta² y cuatro de Guaviare³. En los diferentes actores del territorio existe un consenso respecto al buen funcionamiento que tuvo el proceso PDET en el territorio, el cual contó con una amplia participación de las comunidades (tanto indígenas, como campesinas), autoridades locales y la institucionalidad departamental y municipal. La “comunidad FARC” participó en el proceso dentro de la población campesina lo que causó inconformidad dentro de esta colectividad.

Para la realización de este proceso se concertó con las comunidades indígenas la ruta para la participación de esta población, lo que facilitó el proceso.

Contenido

Estado de la implementación del Acuerdo de Paz

Posiciones de los actores claves en el territorio

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Principales preocupaciones

La implementación en cifras

¹ Comprende los municipios de: La Macarena, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Mapiripán.

² La Macarena, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Mapiripán.

³ Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare que comprenden todo el departamento.

Asimismo, se realizaron mesas de trabajo interculturales donde se compartieron las visiones y necesidades de la población campesina e indígena para buscar puntos en común que sirvieran como puntos de partida para la construcción del PDET.

La mayor dificultad en la construcción del PDET está asociada a las zonas especiales de manejo ambiental, como el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), donde se encuentran cerca de 7.000 personas y se restringen las actividades y acciones a implementar. A su vez, la alta expectativa de las comunidades frente a los PDET contrasta con la preocupación generalizada por la falta de los recursos para su implementación y la incertidumbre sobre la posición del gobierno del presidente Duque frente al cumplimiento de lo acordado.

b) La reincorporación

En la región del sur del Meta, las percepciones sobre la reincorporación evidencian que el proceso se encuentra en un estado de debilidad por la incertidumbre que genera la terminación de los ETCR y los retrasos en la implementación de los proyectos productivos y la reincorporación económica. En cifras de la ARN, al ETCR de Vistahermosa llegaron 266 personas, donde actualmente permanecen constantemente alrededor de 50 excombatientes. Más allá del número de personas dentro del ETCR, en el sur del Meta, esta población se caracteriza por una alta movilidad en el territorio.

Si bien el ETCR de Vistahermosa cuenta con un número reducido de excombatientes que permanecen en la zona, este se ha convertido en el centro de interlocución de más de 200 desmovilizados que se encuentran haciendo su proceso de reincorporación en otros municipios o en las Áreas de Reincorporación Grupal (ARG)⁴. En el sur del Meta, actualmente hay tres ARG certificados en los municipios de Uribe, Puerto Rico y Vistahermosa, integrados por cerca de 120 excombatientes.

En materia de reincorporación económica, organizaciones y excombatientes aseguran que, si bien se han cumplido los pagos para la renta básica, hay retrasos en la puesta en marcha de los proyectos productivos. Por este motivo, los excombatientes han liderado de manera autónoma la construcción y el desarrollo de proyectos al interior y exterior de los ETCR. Por ejemplo, excombatientes del espacio territorial de Vistahermosa han adelantado -con grandes dificultades- iniciativas de sacha inchi, caña de azúcar, criadero de cerdos y ganadería. Sin embargo, actualmente la preocupación de los excombatientes es la sostenibilidad de los proyectos por la falta de tierras y la incertidumbre generada por la culminación y desmonte de los ETCR y la renta básica. Esto ha generado desincentivos en esta población para impulsar nuevos proyectos productivos dada la incertidumbre que genera esta situación.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

⁴Término utilizado por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).

En el marco de la sustitución de cultivos ilícitos las percepciones giran en torno a la reducción de los cultivos de coca en el sur del Meta. En el monitoreo realizado por UNODC, en octubre de 2017, Meta era el quinto departamento del país con mayor número de hectáreas (has) de coca, con un total de 4.039 has, de las cuáles, 2.456 fueron erradicadas voluntariamente en 2018. Es decir que en esta zona se presenta un índice de cumplimiento del 88% en la erradicación.

Según el reporte de UNODC, en enero de 2019 Meta contaba con 1.068 familias inscritas al PNIS que recibieron el 92.8% de los pagos. Actualmente, esperan el sexto y último pago. Si bien, entidades públicas y organizaciones sociales sostienen que no existen prácticas de resiembra en las zonas erradicadas, advierten sobre el traslado de cultivos a otras zonas, principalmente parques naturales. A la vez que señalan la importancia del cumplimiento de lo pactado para evitar la resiembra.

Una de las mayores dificultades para el PNIS han sido las restricciones de las zonas espaciales de manejo ambiental, ya que en estos territorios se restringe la puesta en marcha de proyectos productivos. Asimismo, los distintos actores entrevistados advierten sobre la vulnerabilidad de la población recolectora que no ha recibido beneficios del programa hasta el momento. Por otro lado, es evidente la preocupación de los beneficiarios y funcionarios del programa sobre los cambios que pueda traer la integración de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

d) Garantías de Seguridad

La región del sur del Meta muestra el deterioro de las condiciones de seguridad por el fortalecimiento de las estructuras disidentes. Actualmente, en zonas como La Macarena y la zona limítrofe de este municipio con Vistahermosa se observa la reactivación de los “manuales de conducta” impuestos por las disidencias y el control a la movilidad. También, han aumentado los homicidios y el desplazamiento forzado, para 2018 se presentaron tres eventos en Uribe, Mapiripán y La Macarena.

Frente a la situación de líderes sociales, los diferentes actores entrevistados señalan que no hay una presión sistemática sobre los líderes, pero se están presentando amenazas y algunos asesinatos. La Macarena (2), Puerto Rico (1) y Mapiripán (1) presentaron asesinatos de líderes sociales durante 2018. Pese a las bajas cifras en los homicidios, señalan un aumento en las amenazas y presiones contra esta población.

En materia de seguridad de los excombatientes, los entrevistados concuerdan en que en la zona de Vistahermosa no hay una amenaza sistemática a esta población. Desde el seguimiento de la FIP, la base de agresiones a excombatientes reporta dos homicidios entre 2017 y 2019 ocurridos en los municipios de Granada y Mesetas. Si bien el número de eventos es reducido, la presencia y fortalecimiento de los grupos disidentes en la región no deja de prender las alarmas sobre la posible presión a los excombatientes.

2. La situación de las víctimas

El Registro Único de Víctimas reporta un total de 196.368 víctimas en el Meta, de las cuales el 17% corresponden a los municipios del sur del departamento. Vistahermosa

y Puerto Rico concentran el mayor número de afectados en esta región con 10.195 y 5.081 víctimas respectivamente. En el departamento, se han realizado procesos de reparación colectiva para las víctimas que incluyen componentes de retorno e intervención en infraestructura en El Dorado, El Castillo, San Juan de Arama, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa⁵. En materia de capacidad financiera, las entidades encargadas manifiestan su preocupación por la falta de recursos para las reparaciones.

Desde el escenario de reparación individual, las víctimas han sido clasificadas con el fin de priorizar la atención a población adulta, incapacitada o en situación de pobreza. Sin embargo, organizaciones de víctimas de la región reclaman que a la población priorizada le exigen requisitos que no pueden cumplir con facilidad para recibir su indemnización. Sobre el estado actual, las víctimas expresan inconformidades y denuncian la falta de respuesta estatal, con programas que han reparado un número muy bajo de personas. Con la implementación del Acuerdo de Paz las víctimas tuvieron amplias expectativas sobre su reparación, las cuales señalan no se cumplieron; por el contrario, dicen sentirse en un segundo plano.

3. Posiciones de los actores claves en el territorio

Existe un consenso general respecto a los beneficios que trajo inicialmente la firma del Acuerdo de Paz en el sur del Meta, bastión armado de las FARC. Sin embargo, dados los retrasos en la implementación de lo acordado y el fortalecimiento de estructuras disidentes de las FARC en esta zona, hoy se observa una preocupación en las comunidades e instituciones sobre una posible reactivación de la violencia. La institucionalidad reconoce los impactos positivos y las oportunidades que ha abierto el proceso, pero también es consciente de las limitaciones económicas y la falta de capacidades institucionales a las que se enfrentan, especialmente los gobiernos locales. Las comunidades, por su parte, aún tienen altas expectativas en la transformación del territorio, especialmente los proyectos priorizados en el PDET. Finalmente, las FARC han manifestado escepticismo y desconfianza en cuanto a la capacidad del Estado de cumplir con lo pactado, pero siguen expresando su compromiso frente al proceso de paz.

4. Principales dinámicas de la confrontación armada

La desmovilización de las estructuras armadas de las FARC en el territorio ocasionó que los índices de violencia descendieran sustancialmente en el sur del Meta, generando una mejora de las condiciones de seguridad. No obstante, se mantuvieron estructuras disidentes, principalmente en la zona de Mesetas (frente 40) y La Macarena (Frentes 62 y 7) que se han venido fortaleciendo y expandiendo hacia otras zonas como Uribe y Vistahermosa. Actualmente, los municipios con mayor presencia y afectación por parte de estos grupos son Mesetas, La Macarena

⁵ En Vistahermosa se están adelantando procesos de reparación colectiva en 5 veredas.

y Puerto Rico, aunque se han expandido hacia otras zonas, como Uribe, Vistahermosa (zona de parques). También, actores en el territorio advierten sobre el fortalecimiento de las estructuras del Bloque Meta que operan hacia el centro del departamento y con influencia en la zona de la cabecera municipal de Vistahermosa.

5. Preocupaciones sobre la implementación

- Preocupa el fortalecimiento de estructuras disidentes que está generando el deterioro de las condiciones de seguridad, principalmente en La Macarena, Puerto Rico y recientemente en Vistahermosa (zona de parques).
- Incertidumbre de las comunidades frente a la materialización de las iniciativas priorizadas en el PDET.
- Limitada atención a las víctimas y el malestar que genera en la población los retrasos e incumplimientos en los procesos de reparación colectiva y las dificultades para acceder a la reparación individual.
- La principal preocupación para la población en reincorporación es al proceso de formalización y consecución de tierras para implementar los proyectos productivos y la incertidumbre sobre la terminación de los ETCR y la renta básica.

6. La implementación en cifras



